

Belice, el mejoramiento y cumplimiento de las normas de construcción, evaluaciones de riesgo, diseño de medidas para proteger la infraestructura crítica, y planes para la gestión de desastres.

Consideraciones ambientales: Integración de la gestión del riesgo de desastres en los préstamos para el desarrollo

Cuando el Banco y el país desarrollan una propuesta para un préstamo, ésta se somete a un proceso de revisión ambiental. La revisión ambiental puede requerir que se lleven a cabo evaluaciones detalladas del impacto ambiental, e informes especiales sobre la mitigación de cualquier riesgo ambiental que el proyecto a ser financiado pudiese plantear. En la revisión ambiental se incluye la evaluación del riesgo del proyecto ante desastres naturales. En este sentido, las revisiones ambientales del Banco han examinado asuntos como las estrategias para la gestión del riesgo de deslaves e inundaciones para los programas de vivienda, medidas para reducir los riesgos que representan los vientos y las crecidas en proyectos de gestión en zonas costeras, la resistencia a desastres de los puentes y caminos, y los planes de contingencia para reaccionar ante las interrupciones en los servicios básicos, por mencionar algunos.

A pesar de este bien establecido proceso de revisión ambiental, el riesgo de desastres naturales no es siempre identificado como una preocupación prioritaria en donde debiera, y los programas financiados por el Banco han probablemente sub-invertido en mitigación para salvaguardar esas inversiones, si es que el impacto de los desastres naturales en activos financiados por el Banco constituye alguna indicación. Sin embargo, algunos desastres recientes han hecho visible de nuevo la imperativa necesidad de invertir en mitigación, y las reuniones de revisión ambiental en las oficinas centrales del Banco continúan tratando asuntos sobre la gestión del riesgo de desastres con renovada energía. Todo esto es para señalar que el proceso de revisión ambiental del Banco generalmente es un instrumento adecuado para sacar a luz el riesgo de desastres naturales y su gestión dentro de los proyectos financiados por el Banco, pero su efectividad depende de la vigilancia con la que se ejerza.

En el momento actual, el proceso de revisión ambiental puede resultar más adecuado para evaluar inversiones en infraestructura física específica – puentes, instalaciones eléctricas, sistemas de agua y alcantarillado, proyectos de vivienda y mejoramiento de vecindarios. No obstante, especialmente después de eventos mayores, la revisión ambiental contempla cada vez más asuntos relacionados con la gestión del riesgo de desastres en proyectos que financian reformas reguladoras, institucionales y a políticas sectoriales. El salvaguardar los activos físicos debe tener un impacto significativo en el sector urbano, ya que gran parte de las inversiones de los países en infraestructura social y económica, se encuentra, de hecho, en las ciudades. Sin embargo, a medida que las ciudades van creciendo, el riesgo de la región ante los desastres también se incrementa. Se necesita un enfoque macro concertado que ponga atención en el mejoramiento de la capacidad para manejar la vulnerabilidad

en las ciudades en forma general – y no sólo en las inversiones específicas que el Banco financia. En las secciones que siguen a continuación se discutirá el rol de las IFIs en el apoyo a este enfoque macro.

III. El cambiante contexto en la región

Una nueva y mayor vulnerabilidad ante los desastres se encuentra en las áreas urbanas

La reconstrucción resistente a desastres, y los componentes de mitigación y preparación a lo largo de toda la cartera del Banco son importantes para el éxito de la sostenibilidad de estos proyectos. No obstante, al igual que otras IFIs, el impacto del Banco en términos de estimular medidas adecuadas de mitigación en la práctica – particularmente dado el riesgo– no debe exagerarse.

Como todos sabemos, el impacto de los desastres sobre el desarrollo es el resultado no sólo de la severidad y frecuencia de los fenómenos naturales en un lugar, sino también del nivel de vulnerabilidad y de la falta de resistencia física, económica, social y ambiental a los desastres naturales. Una serie de tendencias están afectando visiblemente la vulnerabilidad de la región a los desastres naturales.

La importante suposición de que la vulnerabilidad a los desastres es mayor en las áreas urbanas es realmente correcta. A pesar de las enormes inversiones en activos físicos, las inversiones necesarias para proteger estos activos y para garantizar la seguridad a los habitantes urbanos, no mantienen la misma proporción. Los bienes y servicios vitales – tales como las redes de distribución de alimentos, los sistemas de distribución de agua y combustible – son particularmente vulnerables a daños causados por desastres naturales. Dada su extensión e interdependencia, las interrupciones en estos sistemas conllevan a amplias consecuencias para las poblaciones afectadas. Por ejemplo, la interrupción de las redes de agua en un terremoto, no sólo disminuye la capacidad de combatir incendios, sino también acelera el deterioro de las condiciones de salud, y con ello el incremento en el número de víctimas.

Durante los años 90, el número de personas que viven en áreas urbanas en Latinoamérica se ha incrementado tremendamente, y se estima que la tendencia dará como resultado a un 85% de la población de la región viviendo en las ciudades para 2025 (CEPAL). Adicionalmente, la tendencia en Latinoamérica ha sido el rápido aumento en la proporción de la población que vive en megaciudades. Esto puede ser uno de los factores más importantes en los cambiantes perfiles de vulnerabilidad de la región. A medida que las ciudades crecen, más personas y más activos críticos para el desarrollo se ubican en áreas propensas a desastres. Dicho en forma simple, más y más infraestructura social y económica, edificios, instalaciones críticas como hospitales y escuelas, y asentamientos humanos se encuentran en riesgo.

Al mismo tiempo que las ciudades son claramente motores para el crecimiento económico, se encuentran también absorbiendo mayores porcentajes de los pobres en la región. La pobreza, debido a su propia naturaleza, lleva a la gente hacia un mayor riesgo de desastres así como a no contar con recursos, y se asientan en áreas propensas a desastres como laderas muy empinadas y llanuras inundables. El tipo de construcción en la región también está incrementando la vulnerabilidad de la región a los desastres. La mayor parte de las construcciones más antiguas están hechas de adobe o mampostería no reforzada –conocidos por su deficiente respuesta en algunos tipos de terremotos–. Hemos visto repetidamente cómo los techos de teja pueden matar. Las construcciones más recientes generalmente no respetan las normas para construcción resistente a desastres. Muchos asentamientos residenciales informales, especialmente en sus etapas iniciales de consolidación, no incluyen construcciones resistentes a desastres (los amarres simples en techos pueden reducir grandemente el daño en caso de un huracán), ni las medidas de mitigación básicas de bajo costo y a nivel comunitario, como muros de contención y drenajes de superficie adecuados.

A lo largo de toda la región, las regulaciones municipales diseñadas para garantizar estándares adecuados para el desarrollo urbano, han tenido un impacto sistemáticamente tergiversado en la capacidad de los pobres para adquirir legalmente tierras ubicadas en áreas relativamente seguras, y para mejorar rápidamente sus casas y barrios – incluso medidas para reducir el riesgo de desastres –. Las regulaciones municipales especifican la dimensión mínima para áreas reservadas, el tamaño de los terrenos, y los estándares de servicio para agua, alcantarillado, drenaje y similares, y también para vivienda social. La subdivisión y venta de terrenos que no cumplen con estos estándares son ilegales, y dichas propiedades no pueden ser registradas. Estas regulaciones pueden distorsionar severamente los mercados de tierras al incrementar el precio.⁵⁸ Al excluir a los pobres del mercado legal de tierras, las regulaciones prolongan la inseguridad que inhibe la inversión privada. Esto se ve exacerbado por la falta de habilidad de las instituciones públicas de proporcionar apoyo para infraestructura y mejoramiento de vecindades. Las deficiencias en las regulaciones para el desarrollo urbano y en el apoyo institucional están descartando a los pobres del acceso a tierras legales y seguras, y están limitando la consolidación más rápida de vecindarios. En áreas como la Ciudad de Guatemala, esto se está traduciendo directamente en una creciente vulnerabilidad a los desastres naturales.

La evidencia sugiere que hoy nos encontramos ante un mayor riesgo de sufrir desastres verdaderamente catastróficos que hace cincuenta años. Seguramente la región ha podido ver las consecuencias de esta vulnerabilidad acumulativa en los

⁵⁸ Un estudio del BID (1997) mostró que un cumplimiento total de todos los estándares reguladores en la Ciudad de Guatemala, requeriría de un precio de venta superior a los \$3,500 para un terreno con el menor tamaño permitido por la ley. Este precio mínimo representa más de 18 meses de ingreso total para el 60% de los hogares urbanos con ingresos mensuales totales de \$200 o menos.

últimos años, con los crecientes costos económicos y las perturbaciones sociales causados por los desastres naturales.

Finalmente se está dando el cambio hacia el entendimiento de la vulnerabilidad a desastres

Sin duda, han sido los eventos más recientes – los huracanes Mitch y George, El Niño de 1997-1998 – los que han llevado el tema de desastres fuera del exclusivo campo de la asistencia humanitaria, y en forma clara hacia el ruedo del desarrollo. Para los especialistas en reducción de desastres que se encuentran trabajando arduamente durante la última década (no menos que la Década Internacional para la Reducción de Desastres Naturales), esto es muy alentador. Estos eventos tuvieron impactos enormes y generalizados, afectando a varios países a la vez. Además, representan un cambio de la experiencia en la región en donde los países por sí mismos han enfrentado la gran mayoría de eventos de este tipo sin contar con una asistencia internacional masiva. La experiencia más reciente ilustra claramente la relevancia de la reducción de desastres – de la prevención y mitigación de desastres –, así como la clara diferencia que existe con el enfoque tradicional de prepararse, responder y reconstruir en caso de una emergencia.

Nunca antes había sido la mitigación de desastres más fácilmente reconocida como un insumo fundamental, no sólo en proyectos de reconstrucción, sino también de planificación para el desarrollo y gestión entre sectores. Su visibilidad en las agendas gubernamentales no tiene precedente en la región. Los países incluyeron la mitigación de desastres como parte de sus planes nacionales de reconstrucción y transformación presentados en Estocolmo. Y en octubre último, en su Cumbre Anual de Presidentes de Centro América, los seis presidentes de Centro América adoptaron el “Marco Estratégico para la Reducción de la Vulnerabilidad y de los Desastres en Centro América”. El marco contiene lineamientos básicos para la mitigación de desastres, acciones para la preparación y gestión de emergencias, con énfasis especial en el apoyo a las poblaciones más vulnerables. Los planes nacionales de reconstrucción y la adopción de este marco, ponen de manifiesto el compromiso de los países con la mitigación de desastres para garantizar la sostenibilidad de las inversiones en reconstrucción después del huracán Mitch, así como con la reducción del riesgo recurrente y a largo plazo que enfrentan debido a los peligros naturales.

Este nuevo compromiso político es importante, pero debemos recordar que la mayoría de países en la región tienen un largo trecho por recorrer. Con algunas pocas y notables excepciones, los esfuerzos de prevención y mitigación están tomando lugar en una forma ad hoc cuando mucho, y la aptitud para gestionar o reducir el riesgo de desastres naturales en los países es limitada. Típicamente, los países han carecido de arreglos legales e institucionales efectivos, presupuestos dedicados, así como del *know-how* técnico y político como para poder asumir un liderazgo en el área de la prevención. Mientras que muchos países cuentan con un plan de emergencia

(contingencia), pocos tienen una estrategia o política nacional para la prevención y mitigación.

Las aptitudes de advertencia anticipada y preparación ante emergencias – el estado de disposición o preparación para poder responder rápida y efectivamente para salvar vidas, reducir el sufrimiento y aumentar la recuperación de las comunidades después de ser golpeadas por un desastre – son sumamente irregulares, tal y como fue puesto de relieve por los recientes eventos en Centro América y Venezuela. A pesar de las recientes experiencias devastadoras, durante la última década, aun los países más pobres en Centro América han comenzado a mejorar su capacidad de respuesta, y se han vuelto muy competentes en un mínimo de actividades de preparación tales como el almacenaje de suministros, administración de información en algunos casos, y capacitación de entes locales de respuesta ante emergencias. A lo largo de todo el período, la comunidad internacional también ha apoyado estos esfuerzos a través de evaluaciones de riesgo a nivel regional, nacional y local, capacitación e inversiones para la preparación ante emergencias, y proyectos de mitigación.⁵⁹ Hoy por hoy, después del huracán Mitch, muchos más donantes reconocen que la gestión de desastres es un sector que requiere de un apoyo concertado. Ellos han identificado riesgos naturales particulares, comunidades vulnerables e instituciones responsables (públicas y privadas), y están diseñando programas para ayudar a los países a entender y afrontar en mejor forma el siguiente desastre.

Aun y cuando tenemos recordatorios diarios sobre las fallas originadas por colocar a la mitigación dentro de las inversiones de reconstrucción – puentes recién reemplazados fueron destruidos por la estación lluviosa del pasado octubre, y las familias están reasentándose nuevamente en áreas de alto riesgo –, los países están programando nuevas inversiones, con apoyo de donantes, para mejorar sus aptitudes para la gestión del riesgo. Esto incluye recursos para el monitoreo de peligros y sistemas de pronóstico, mapeo de riesgos, manejo de cuencas, regulaciones para la construcción, y trabajos de mitigación y actividades de preparación a nivel comunitario, entre otras cosas.

⁵⁹ Algunos estudios recientes resumen los esfuerzos de la comunidad internacional para apoyar la mitigación de desastres y las actividades de preparación en Centro América. Para mencionar solamente tres: el Programa para la Preparación ante Desastres de la Oficina Humanitaria de la Comisión Europea (DIPECHO) en 1997, patrocinó un diagnóstico de las aptitudes en CA y el Caribe para la gestión de desastres (realizado por el Centro de Investigación sobre Epidemiología de Desastres de Bélgica, y el Centro Internacional de Capacitación e Intercambios en las Geociencias de Francia). En 1999, la USAID empezó a patrocinar un estudio sobre las aptitudes para la gestión de desastres en CA, el cual incluye un resumen del apoyo internacional (“La Evaluación” está siendo realizada por International Resources Group). El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mediante sus responsabilidades principales en la organización del Grupo Consultivo Regional para la Reconstrucción y Transformación de Centro América, está también jugando un papel decisivo en ayudar a coordinar información, estrategias y recursos para la región después del huracán Mitch.

IV. Nuevos enfoques para los préstamos relacionados con desastres

Nueva política sobre desastres naturales e inesperados

El Banco ha tenido una política específica de desastres implementada desde principios de los años 80, la cual estipula el tipo de apoyo que el Banco proporcionaría en caso de una emergencia. Siempre se ha hecho la distinción de que el Banco ayuda a países a financiar actividades de rehabilitación y reconstrucción, y con excepción de pequeñas donaciones iniciales, el Banco deja la asistencia humanitaria de emergencia en manos de otras agencias de cooperación internacional, tales como la ONU.

En marzo de 1999, el Banco adoptó una nueva política de desastres con una mejora vital – explícitamente ha colocado a la prevención y mitigación de desastres en igualdad de condiciones con la respuesta y reconstrucción ante desastres en las operaciones del Banco. La política establece que el propósito de la participación del Banco en el campo de los desastres naturales es el de ayudar a los países miembros a proteger y reanudar su desarrollo socioeconómico, y apoyar los esfuerzos de los países para fortalecer su capacidad de gestionar los riesgos de desastres naturales. La política hace explícita la importancia de reducir la vulnerabilidad como un elemento importante de los préstamos para el desarrollo, y ha preparado el terreno para proyectos autónomos dedicados a la gestión de desastres – en ausencia de un evento desastroso.

Así, la política de desastres presenta claramente el enfoque del Banco que se propone colocar en la línea central a la evaluación y mitigación del riesgo en toda la actividad prestamista del Banco, y dirigir el apoyo del Banco hacia el mejoramiento de la capacidad general del país para gestionar el riesgo de desastres (mitigación y preparación). En el caso de las emergencias, la política enfatiza más a fondo que el Banco, cuando sea posible, coordinará con otros donantes y actores locales para determinar el alcance de la participación del Banco. Las recientes operaciones del Banco ponen de manifiesto elementos de este nuevo enfoque.

Énfasis en las reformas estructurales (institucionales): generando sistemas nacionales para la gestión de desastres

Con la mitigación de desastres en las agendas de los gobiernos, podría por primera vez existir una demanda significativa para generar sistemas nacionales para la mitigación de desastres. El Banco está poniendo un nuevo énfasis en el apoyo a las reformas estructurales (institucionales) para ayudar a los países a mejorar sus políticas/estrategias para la gestión de riesgos, los marcos institucionales y reguladores, así como la capacidad técnica y coordinadora entre sectores necesaria para garantizar inversiones sostenidas en mitigación de desastres para reducir su vulnerabilidad a los desastres naturales en el largo plazo. Los gobiernos locales y la sociedad civil se encuentran en primera línea cuando se trata de la mitigación y

preparación ante desastres – y se otorga especial atención para promover sus aptitudes–. Los recursos del Banco para financiar trabajos de mitigación – componentes de inversión de un proyecto – son un instrumento importante para promover las reformas institucionales que buscan transformar estos sistemas nacionales en ciernes, en proveedores más eficientes de servicios de mitigación y preparación. De hecho, el ímpetu de la oleada de actividades de mitigación y preparación que inevitablemente surge en la mayoría de situaciones posdesastre se perderá si los países no organizan sistemas nacionales efectivos para la gestión de desastres que apoyen y brinden continuidad a los esfuerzos.

Por ejemplo, proyectos recientes en Argentina y Colombia están haciendo justamente esto. En Centro América, el Banco ha empezado apoyando un programa regional para promover la mitigación de desastres. La operación financiará la formulación de planes de acción para políticas de mitigación y arreglos institucionales, un Fondo para la Mitigación de Desastres que otorga donaciones de contrapartida para proyectos de mitigación identificados por los países participantes; y fortalece la red regional para compartir información técnica y las prácticas más recomendables.

Mecanismo para la Reconstrucción en Emergencias: recursos más expeditos para la reconstrucción

En diciembre de 1998, el Banco estableció el “Mecanismo para la Reconstrucción en Emergencias” (*Emergency Reconstruction Facility, ERF*) – un mecanismo que permite al Banco responder rápidamente en el período subsiguiente a un desastre. Su propósito es poner a disposición, en forma muy rápida, recursos para financiar un menú preestablecido de actividades elegibles – aquéllas que ayuden a acelerar la restauración de los servicios, financiar reparaciones temporales, y realizar operaciones de limpieza durante el período inmediato después de un desastre. La solicitud por parte del país para utilizar estos fondos activa un proceso rápido de aprobación de préstamo en las oficinas centrales del Banco – el cual puede durar tan poco como de dos a cuatro semanas. Luego del terremoto del año pasado en la región cafetalera de Colombia, en tan sólo 27 días estuvieron disponibles recursos frescos por un monto de \$20 millones para el Fondo de Reconstrucción del Eje Cafetero, y su ejecución en la práctica ha sido rápida.

Previsto como un mecanismo a ser activado en los primeros días y semanas después de un desastre, el ERF puede proporcionar hasta \$65 millones a cargo del Capital Ordinario del Banco, y hasta un monto total de \$35 millones a cargo del Fondo para Operaciones Especiales del Banco (recursos altamente favorables), para financiar las operaciones individuales del Mecanismo sobre una base reembolsable. Este Mecanismo puede ser utilizado como la opción del Banco y está sujeto a una justificación de caso por caso; típicamente el Mecanismo financia actividades durante un período de 12 meses. Siendo una asistencia de corto plazo para la reconstrucción, este mecanismo no reemplaza a los préstamos para reconstrucción más convencionales que el Banco otorga a los países.

IV. Enfrentando los retos de los préstamos para el desarrollo en una región propensa a los desastres: Algunos asuntos para el Banco

Cultura de prevención de desastres: Creando demanda para la mitigación

Cuando los especialistas en desastres se concentran en cómo ayudar a los países a mejorar sus aptitudes para la gestión de desastres, la tendencia es generalmente enfocarse hacia la provisión o suministro de todo tipo de aptitudes científicas, técnicas y operativas – es decir, el lado de la oferta de la gestión de desastres: sistemas para el monitoreo de riesgos, equipo y *know-how* técnico para la evaluación de riesgos, sistemas de pronóstico y advertencia anticipada, centros de comando, e inversiones públicas para la mitigación, por mencionar sólo algunos. Sin embargo, a menudo resulta difícil saber lo que es apropiado, poder dimensionar estas inversiones de forma que no sean ni demasiado grandes ni demasiado pequeñas, y poder evaluar las inversiones prioritarias.

Otra forma de visualizar el problema es que ponemos demasiado poca atención en entender lo que se necesita, desde el punto de vista de los consumidores de la gestión de desastres, y en estimular una *demand*a efectiva para la mitigación. Las familias necesitan contar con hogares y vecindades seguros, las comunidades desean proteger sus escuelas y clínicas de salud y diseñar refugios seguros, las compañías necesitan salvaguardar sus activos ante una interrupción en su negocio, y los gobiernos locales quieren hacer cumplir las normas de construcción y las decisiones tomadas sobre el uso de la tierra. La atención hacia la demanda de seguridad ayuda también a asignar los recursos para mitigación en forma más eficiente, y no sólo permite ayudar a que los gobiernos y otros responsables hagan lo correcto en lo que a gestión del riesgo se refiere (como se quiera definir eso), sino que también monitoreen el progreso en la reducción de la vulnerabilidad a los desastres.

Algunos ejemplos de mecanismos que el Banco podría considerar para ayudar a estimular y consolidar esta demanda de mitigación, incluyen lo siguiente:

- *Facultar a los constituyentes.* Es decir, generar consumidores informados – los que pueden ser comunidades locales y gobiernos municipales, ministerios de línea, o el sector privado – que entiendan los riesgos que enfrentan, y que estén interesados en salvaguardarse a sí mismos y a su patrimonio. Comprende también el compartir prácticas recomendables y demostrar los resultados positivos de las medidas de mitigación. Asimismo, implica hacer fácil y rápido el acceder a información sobre los riesgos que las comunidades enfrentan, lo que las hace vulnerables, y su posición en relación a otras comunidades, todo esto puede ayudar a que la mitigación llegue a considerarse una prioridad. El Banco puede apoyar el proceso de establecimiento de prioridades – garantizando la participación de los interesados, promoviendo la resolución de conflictos y la

evaluación de las compensaciones—. Las operaciones de mitigación de desastres apoyadas por el Banco se verán beneficiadas al contar con instituciones en la región técnicamente capaces, operativamente activas y políticamente hábiles.

- *Incentivos económicos:* Por ejemplo, la provisión de donaciones de contrapartida (*matching grants*) para trabajos de mitigación. Estas donaciones señalan la importancia de la mitigación, y a la vez estimulan la inversión en un área que pudiera ser nueva para las municipalidades y otros: La experiencia positiva estimula su propia demanda. Los sectores público y privado pudieran también querer dirigir subsidios que estimulen las inversiones en mitigación – por ejemplo, subsidios para estudios específicos de factibilidad para proyectos mayores de inversión en mitigación, los que serían en sí mismos financiables.
- *Diálogo sobre políticas.* Las IFIs, en forma particular, se encuentran en constante diálogo con los funcionarios gubernamentales superiores en cuanto a la identificación de objetivos de desarrollo y la priorización de su financiamiento. Este diálogo de políticas puede sacar a luz vulnerabilidades ante desastres, consolidar iniciativas de políticas y programas en plataformas existentes, estimular inversiones para mitigación y generación de instituciones, y ayudar a los países a monitorear su evolución. Por ejemplo, el nuevo gobierno en El Salvador cuenta ya en su plataforma con la reducción de desastres.
- *Indicadores y estrategias de referencia para medir el progreso de los países en la reducción y gestión del riesgo de desastres.* Las IFIs pueden patrocinar el desarrollo de indicadores que no solamente consideren los riesgos naturales y las vulnerabilidades acumuladas, sino también las aptitudes y esfuerzos de un país en cuanto a evaluación de riesgos, medidas implementadas de mitigación, aptitudes para la advertencia anticipada y la preparación, y las políticas y recursos en juego – en relación a los riesgos que puede enfrentar un país. Mientras que las referencias pueden ser desarrolladas para comunidades individuales o sectores del desarrollo, se pondría especial atención en el impacto que tienen las múltiples actividades sectoriales sobre la vulnerabilidad a los desastres de un país (o de una comunidad). El progreso en la reducción de desastres tiene lugar mediante una acumulación de acciones y aptitudes en una gran diversidad de sectores – en desarrollo urbano, sistemas de infraestructura, salud y educación, el alcance y capacidad de recuperación del sector financiero. Necesitamos entender mejor esta dimensión multisectorial de la reducción de la vulnerabilidad. Las IFIs podrán entonces utilizar estos indicadores para trabajar con los tomadores de decisiones en el desarrollo de estrategias efectivas para inversiones tendientes a reducir y gestionar el riesgo de desastres. El progreso demostrable (o la falta de ello) puede tanto estimular, como recompensar estos esfuerzos.